

Stasiek Czaplicki Cabezas¹: Academia y activismo

Entrevista realizada por *Rossana Barragán²*

Stasiek (Stanislaw) Czaplicki Cabezas es economista ambiental especializado en cadenas de valor agropecuarias y forestales. Se ha enfocado en la deforestación y en la investigación corporativa y financiera. Tiene una amplia trayectoria en ONG nacionales e internacionales, organismos multilaterales y *think tanks* globales (WWF, FAO, Climate Focus, Oxfam, CIPCA). Ha publicado *Desmitificando la agricultura familiar en la economía rural boliviana: caracterización, contribución e implicaciones* (CIPCA, 2021. <https://cipca.org.bo/publicaciones-e-investigaciones/cuadernos-de-investigacion/desmitificando-la-agricultura-familiar-en-la-economia-rural-boliviana-caracterizacion-contribucion-e-implicaciones>); *Las finanzas grises del Agronegocio en Bolivia y su rol en Bolivia* (Alianza por la Solidaridad, 2024. https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/Las-finanzas-grises-del-Agronegocio-en-Bolivia-y-Su-rol-en-La-Deforestacion-4_compressed.pdf), y, junto con Vincent A. Vos, Silvia C. Gallegos y Carmelo Peralta-Rivero, *Biodiversidad en Bolivia: impactos e implicaciones de la apuesta por el agronegocio* (CIPCA, 2020). <https://cipca.org.bo/publicaciones-e-investigaciones/articulos-cientificos/-biodiversidad-en-bolivia-impactos-e-implicaciones-de-la-apuesta-por-el-agronegocio>). Entre sus contribuciones más recientes figura “Agroindustria y ganadería: Mal negocio para ecosistemas y bosques”. En: Natasha Morales (coord.). *A fuego y mercurio. Crisis ecológica y desigualdades en Bolivia*. Informe de OXFAM en Bolivia, 2024. También ha publicado varios artículos en dos medios alternativos, la *Revista Nómadas* y la publicación *Muy Wáso*.

1 Entrevista realizada el 29 de octubre de 2024 en las oficinas del CIDES-UMSA, La Paz.

2 Historiadora e investigadora del CIDES-UMSA. Actualmente dirige la Revista *Umbrales*.

Rossana Barragán (R.B.). En primer lugar, quisiera agradecerte por aceptar esta entrevista. Has estado en muchos canales y muchas personas te han visto circulando por varios medios de prensa. Has estado también con María Galindo, con quien hiciste uno de sus famosos radio-documentales Antes de empezar, te pido que te presentes tú mismo, así como el ámbito de tus movimientos e intervenciones.

Staziek Czaplicki (S.C.). Te agradezco a ti por animarte a tener esta entrevista y sobre este tema porque sé que no es el ámbito en el que te mueves. Soy economista ambiental de formación; me he especializado en temas agrícolas y pecuarios, particularmente en el enfoque de cadenas de valor. Soy investigador, pero de investigación aplicada, sobre todo. Por otro lado, soy también un activista de larga data; para darte una idea, ya van a ser 15 años desde que organicé mi primera protesta. En términos de gestión, he estado a cargo de proyectos, de áreas de trabajo, he sido asesor de políticas públicas, asesor técnico y muchas otras cosas más. Pero, en realidad, todo esto refleja la vida precarizada del consultor-investigador, que tiene que acoplarse a las oportunidades que existen y reinventarse cada vez para continuar, a la par con todo mi trabajo de activista, que ya tiene muchos años.

R.B. Me has pasado varios de tus trabajos, y los voy a mencionar para que la gente que nos escuche y la gente que nos lea tenga un pantallazo sobre tus contribuciones. También me interesa aclarar el vocabulario y el léxico que vamos a utilizar en esta charla, para que las personas que nos lean nos comprendan.

Uno de tus últimos trabajos es parte de un libro muy sonado que OXFAM ha presentado hace unas dos semanas, y que se titula *A fuego y mercurio*; en este tú has escrito un capítulo dedicado a la agroindustria y la ganadería. Has publicado también varios artículos en una revista muy importante y muy linda, la revista *Nómadas* (<https://revistanomadas.com/>), que aconsejamos consultar. Me ha llamado la atención el proyecto de esta revista, que plantea recuperar el ADN del periodismo. Su fundador, Roberto Navia, es un periodista sin duda muy reconocido y coautor de un libro sobre Evo Morales. En esa revista trabaja además un equipo de periodistas muy jóvenes, tú uno de ellos, que has escrito muchísimos artículos sobre el tema. Sus títulos son bastante impactantes.

Además, es todo un arte titular un trabajo para que refleje lo que uno quiere decir. Reproducimos los títulos de algunos de tus artículos: “Agronegocio sin frenos: Bolivia rumbo al desastre ecológico”; “¿Cómo y quiénes financian la deforestación?”; “El baile del fuego: políticos y agro-industria danzan sobre las cenizas de los bosques”; “Las fantasías y falacias detrás del impulso por el agronegocio exportador en Bolivia”.

Como activista y como investigador, y solo con leer estos títulos, uno puede apreciar los temas en que vuelcas tus esfuerzos, tanto para proporcionar información como para dirigir tu acción activista en contra de algunos mitos que tenemos. Para entrar en ellos, abordemos primero el léxico y los conceptos que utilizas en tus estudios sobre medio ambiente, y que la gente no necesariamente conoce. Por ejemplo, es importante establecer la diferencia entre deforestación y degradación; entre cicatrices de fuego y fuegos e incendios; entre roza, quema y desmontes. Te pedimos que nos expliques estos conceptos, aprovechando que tienes un artículo que es una guía didáctica para no perderse en el tema.

S.C. En realidad hay dos grandes ámbitos de trabajo que se sobreponen: uno tiene que ver con el impacto en los ecosistemas y, por ende, con el cambio de uso de suelo; el otro involucra a los actores y a los diversos fenómenos que impulsan. Yo me he enfocado en tratar de aclarar ciertos términos, que nos ayudan a problematizar pero que muchas veces excluyen elementos de nuestra problematización sin que nos demos cuenta.

Por ejemplo, en el imaginario ambiental, los bosques están en el centro de todas las preocupaciones y, por ende, nos llevan a tener términos que se refieren a su pérdida, que por cierto puede ser permanente o temporal. Un bosque que se quema y que se lo deja regenerar puede recuperarse en 20 años. Una vez que vuelve a tener por lo menos un 30% de cobertura arbórea puede considerarse nuevamente como bosque, según ciertas definiciones técnicas. Pero para un técnico forestal un bosque necesita albergar también 20 a 40 especies como mínimo; desde una perspectiva más ecológica, se lo considera como una plantación, a menos que tenga por lo menos 40 especies. Para mí un bosque tiene que tener sus seres mágicos, tiene que tener etnobotánica, tiene que tener plantas medicinales, muchas más cosas que solo un listado de especies.

Partiendo de esta noción, tengo que adscribirme a la terminología del diablo, como se dice, porque al diablo no le gusta hablar en términos culturales. Habla en términos de hectáreas, en términos de masa de volumen vegetal, que son los utilizados para el diálogo en política pública. Para cerrar la idea, si entendemos que la pérdida de bosque puede ser un proceso temporal o permanente, la deforestación representa el peor escenario posible para ese bosque. Esto se debe a que cuando un bosque es talado o quemado y su suelo se transforma para otros usos, como infraestructura de cemento, cultivos de soya, ganadería u otros, estamos ante un proceso de deforestación. La deforestación, en este sentido, es la pérdida permanente del bosque, ya que en esas condiciones no hay posibilidad de recuperación natural.

R.B. ¿No es la historia de la humanidad un proceso permanente de deforestación y de reforestación? Antes de entrar al tema boliviano, quisiera que nos des tu visión, porque en toda Europa, por ejemplo, había muchos bosques que han sido talados, retallados, reconstruidos, repoblados y rearbolizados.

S.C. Es lógico pensar que a lo largo de historia de la humanidad, en cualquier tiempo y lugar en que se producía alimentos, sí hubo un cambio del ecosistema, se lo desmontó y en su lugar se estableció la agricultura, la ganadería y otros. Ojo, la gran diferencia surge a partir de la Revolución Verde, cuando se comienza a incorporar fertilizantes, y no me refiero al abono orgánico que proviene de las heces de una vaca, sino a fertilizantes de origen químico o inorgánico, utilizados a niveles industriales. Ese cambio transforma la dinámica, ya que permite producir en suelos forestales o boscosos que no son aptos para la agricultura ni para la ganadería.

Una vez que se traspasó ese límite, se abrió un nuevo campo de explotación, alcanzando dimensiones y espacios que no estaban destinados a esas actividades. Además, eso trajo consigo la degradación de suelos, porque en el pasado se utilizaba sistemas rotativos de cultivo para dejar que la tierra deforestada se recupere. El quiebre ocurre cuando esta dinámica toma dimensiones descomunales y se destruyen ecosistemas que, hasta ese momento, no habían sido objeto de cambio de uso de suelos.

R.B. En otras palabras, ¿apuntas a que todo el vocabulario que está surgiendo debe atribuirse también a la magnitud que adquiere la crisis y a tener que enfrentar la crisis climática?

S.C. Totalmente, porque antes solo mirábamos el bosque, y ahora hemos entendido que el problema también ocurre en otros ecosistemas igual de importantes. Debemos hablar de desmonte y no únicamente de deforestación. El desmonte es un término más amplio, que incluye la deforestación o pérdida permanente de bosque, pero también la “deforestación” de ecosistemas no boscosos, que en realidad se llama “conversión de ecosistemas no boscosos”, y que constituye una pérdida permanente de dicho ecosistema. Es un término que describe un fenómeno nuevo que hasta ahora nunca nos había preocupado. Por esta razón aún no se ha acuñado un término específico para este fenómeno.

El desmonte es un término más amplio, que incluye la deforestación o pérdida permanente de bosque, pero también la “deforestación” de ecosistemas no boscosos, que en realidad se llama “conversión de ecosistemas no boscosos” y que constituye una pérdida permanente de dicho ecosistema.

R.B. ¿Cuál es la diferencia entre incendios y desmontes y desmontes planificados? Porque además tenemos –y ahí te añado otro término– el sistema tradicional de roza y quema que han aplicado las poblaciones indígenas desde hace siglos.

S.C. En la medida en que no se permite que el bosque se regenere, se produce una pérdida permanente. En Bolivia, gran parte del bosque se pierde debido a incendios; sin embargo, cerca de la mitad del bosque que se pierde se atribuye a incendios y la otra mitad, a un desmonte mecanizado. Esto no significa que el fuego no se utilice, ya que siempre se recurre a él, a menos que existan sistemas alternativos. Esto implica que cuando se tala un bosque o ecosistemas no boscosos, se genera mucha materia vegetal que queda en el suelo; esta se seca y luego debe eliminarse mediante quemas controladas.

R.B. ¿Esto es propio de la Amazonía o se da también en otros ecosistemas?

S.C. Las primeras preocupaciones sobre los incendios en la Amazonía se remontan al siglo XVI, cuando los portugueses llegan al territorio del actual Brasil y prohíben el uso del fuego para quemar árboles, pero entonces se trataba del cuidado de una mercancía: las maderas preciosas. Es decir, la preocupación sobre los incendios se relacionaba con la propiedad privada y no con los ecosistemas.

Actualmente los incendios están asociados con un proceso de mecanización: ya no se queman 1.000 hectáreas, sino 5.000 o 10.000 hectáreas. Cuando se produce un frente de incendio de varios kilómetros que avanza sobre un ecosistema que ya está afectado por el cambio climático, con sequías más largas y severas y sometido a degradaciones, los resultados son catastróficos. Los incendios han alcanzado proporciones alarmantes, pero no es porque usemos más fuego que antes, sino porque ahora el sistema de producción lo utiliza a una escala gigantesca, en un ecosistema que se está secando y volviéndose más propenso a quemarse.

En este contexto se explican los megaincendios que ocurren en Bolivia desde 2019 y en otros países con bosque tropical, incluso en Asia. La solución no radica en prohibir el uso del fuego, ya que algunos países lo han hecho y el resultado ha sido aún más desastroso, especialmente en ecosistemas que tienen una dinámica de renovación a través del fuego.

En Bolivia, gran parte del bosque se pierde debido a incendios, pero cerca de la mitad de la pérdida de bosque se asocia con incendios y la otra mitad, con un desmonte mecanizado.

R.B. Quisiera preguntarte sobre los focos de calor y las cicatrices de la tierra, porque estos términos tienen que ver con cómo se evalúa, qué instrumentos tenemos para evaluar cuánto hay de desmonte, de desmonte planificado, de deforestación, pero también qué actores están involucrados en estas acciones.

S.C. En primer lugar, voy a hacer un desvío empírico, que es muy importante en el caso boliviano, que es un caso bastante atípico porque los incendios y los desmontes casi no se sobreponen. Esto significa que donde

se quema no se cambia el uso de suelo y, por ende, no se destinan esas áreas a cultivos o ganadería. El 94% de las áreas quemadas por incendios no son utilizadas para fines agrícolas.

R.B. Pero ¿qué pasa con esas regiones que se han quemado, que han sido incendiadas y que no son utilizadas. ¿Tienen tiempo para regenerarse? ¿Son utilizadas como tierras para la venta, para el negocio, para hipotecar la tierra y conseguir préstamos con los bancos?

S.C. Mira, eso varía de año en año, pero lo que sí sabemos con claridad es que hay tres tipos de régimen de tenencia de la tierra que son los más afectados: i) las tierras fiscales, donde evidentemente hay un interés por asegurar la tenencia de la tierra demostrando que uno está viviendo allí; ii) los territorios comunitarios de origen (TCO) y las áreas protegidas, que en muchos casos se sobreponen; y iii) las tierras empresariales. En las áreas protegidas y en los TCO no parece haber una disputa significativa por cambiar la tenencia de la tierra, pero sí existen casos de avasallamiento, aunque no son de la magnitud de los incendios que están ocurriendo.

R.B. ¿Puedes mencionar algunas proporciones?

S.C. El INRA, por ejemplo, dotó el año pasado cerca de 80.000 hectáreas de tierra fiscal y en el país se han quemado este año 10 millones de hectáreas. Entonces, la proporción entre ambos no explica el fenómeno, ¿verdad? En el caso de las tierras empresariales, mucho tiene que ver con que la quema o con que el fuego se les sale de control. En este año en particular, en comparación con los años pasados, ha habido megaincendios que simplemente no tienen nada que ver con la tenencia de la tierra, pero sí con el hecho de que nadie los pudo frenar, como en San Matías y en otras regiones de Santa Cruz, en las que el fuego ha arrasado durante semanas.

Esto nos revela que, en cierta forma, los incendios están sujetos a intereses relacionados con buscar mayor tenencia de la tierra, sanear propiedades o desmontar de forma más barata, con el riesgo que genera para todos, e incluso con el amedrentamiento y el tráfico de tierras.

Cuando se sobreponen focos de calor con incendios, uno se da cuenta de que el 70% de los focos de calor responden a incendios y el 30%, no. Sin embargo, ese 30% representa un margen de error demasiado alto, por lo que no es un dato confiable para medir el impacto. Por consiguiente, lo que

realmente se busca medir es el área quemada y, en particular, la superficie afectada. La diferencia entre el desmonte y los incendios, como te decía, es que los incendios pueden invadir tu terreno, pueden ser accidentales, y por eso a veces quedan dudas sobre la responsabilidad.

R.B. Este es un tema que tiene consecuencias en términos metodológicos, ¿no? Porque se da una asociación entre incendio y tipo de propiedad, que tiene que ver también con los actores involucrados.

S.C. Lo que queda claro es que el desmonte no es accidental porque supone una maquinaria que destroza miles de hectáreas y está planificado.

R.B. Tú decías que el desmonte no es incendio, pero también quienes desmontan pueden recurrir al fuego; por lo tanto, puede ser también incendio. ¿Se tiene que pedir autorización para hacer desmontes planificados?

S.C. Solamente entre el 2% y el 12% del desmonte ocurre en zonas previamente incendiadas, lo que es muy poco. En otras palabras, en un año normal en términos de desmonte, como el actual, estamos llegando ya a unas 600.000 hectáreas desmontadas, de las cuales cerca de 45.000 o 60.000 corresponden a zonas previamente incendiadas. De nuevo, son superficies muy pequeñas respecto al área incendiada. Ahora, volviendo al tema del desmonte, este no tiene ese carácter ambiguo ya que, si ocurre, se lo puede atribuir fácilmente a una propiedad. Evidentemente, se puede descartar que algún vecino se haya metido a una propiedad ajena y haya desmontado accidentalmente porque es muy costoso. Dicho eso, existen algunos esquemas donde eso puede ocurrir de forma excepcional, y tiene que ver más con extorsión y otros mecanismos brasileros, denominados *grilagem da terra*, que han llegado a Bolivia, pero que son un poco más complejo.

R.B. ¿Se tiene que pedir autorización para hacer desmontes y desmontes planificados?

S.C. Así es, y también para las quemas. Sin embargo, en Bolivia puedes recibir permiso y luego este puede ser suspendido, y cualquier quema controlada que se realice después se considera ilegal. Además, ¡tendemos a tener incendios que son ilegales en más del 80% de los casos! En el caso del desmonte, se debe pedir permiso, y este depende de la vocación del uso de suelo y de la tenencia de la tierra. Sin embargo, los incendios y los desmontes no necesariamente demuestran que estás usando la tierra o

cumpliendo con la función económica y social. De acuerdo con datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), del 50 al 80% son desmontes ilegales.

R.B. Entonces, ¿tanto desmontes como incendios comienzan siendo ilegales en su gran mayoría y luego se descontrolan?

S.C. Exacto, y por eso leyes como la 741, que autorizan el desmonte en superficies chicas, son problemáticas, pero constituyen una parte marginal del problema.

Otro elemento del que me falta hablar es la cicatriz de quema. Cuando se hace un análisis de este tipo, ya no interesa ver realmente la superficie quemada. Lo que importa es cómo ha ido evolucionando esa quema, analizando el inicio, el origen, por dónde se ha esparcido y hasta dónde ha afectado. Un incendio puede afectar miles de otros predios. En el caso del Bajo Paraguá, este año ha habido dos incendios grandes, uno que se ha originado en un predio ganadero y el otro, en una comunidad intercultural campesina. En el primer caso se ha esparcido por 75 km sin que nadie lo frene y en el otro caso, por 25 km. Finalmente, ambos se han juntado y han creado un frente de 100 km de largo y ya nada lo podía parar, y no se puede decir quién fue el responsable por el fuego. Además, se metieron otros actores a prender más fuego y ya no sabes qué decir. Entonces, la cicatriz de quema tiene también sus limitaciones a la hora de asignar responsabilidades.

R.B. Hablabas de las cicatrices de quema y de que se puede seguir el recorrido del fuego para establecer la relación con los actores involucrados y con los responsables. Pero eso me lleva a plantearme hasta qué punto tiene el país los recursos y la tecnología para poder hacer un verdadero seguimiento. ¿Es posible o no? ¿Y existe o no el interés para hacer este seguimiento?

S.C. Mira, para eso hay que entender que las capacidades técnicas públicas están en múltiples instancias: en la ABT, en una dirección específica de bosques del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), e incluso en el Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI). Con los años, ha mejorado la calidad de las imágenes y la parametrización de los análisis e interpretaciones para determinar quemas o cambios en el uso del suelo. Pero de forma general, la capacidad está ahí,

y antes, cuando había menos incendios, se aplicaba más sanciones que el día hoy.

R.B. Aunque la pregunta resulte un tanto ingenua, es importante plantearla para nuestros lectores: ¿por qué ahora no hay más sanciones si se puede identificar a los actores más claramente? Y cuando dices “antes”, ¿estamos hablando de los ochenta, de los 2000 o del período más reciente, de 2019?

S.C. En Bolivia, a partir de 2015 y 2016, los niveles de desmonte crecen de forma abrumadora, y a partir de 2019 aparecen los megaincendios. En el período anterior, que corresponde a 2013-2014, la ABT solía publicar las listas de quienes habían sido sancionados o afectados, pero ahora esta instancia prácticamente no impone multas. En su lugar, va a los predios afectados, evalúa las razones y las excusas que se exponen y, en algunos casos excepcionales, inicia un proceso administrativo. Lo que hay que entender es que a la ABT le cuesta más caro llegar hasta el propio predio en cuestión que el monto de la multa que puede imponer. ¿Por qué? Porque las multas en el país son irrisorias, son de un máximo de 15 bolivianos por hectárea incendiada o desmontada. Y aunque hace unas semanas han emitido un decreto supremo que establece multas más altas, valen solo para los bosques permanentes forestales, es decir, para un tipo muy específico de tierras.

R.B. Has situado el período por lo menos a partir de 2013. ¿Cómo entender que todo esto se haya dado en este período del MAS, sobre todo de Evo Morales, cuando en su Gobierno se ha puesto tanto énfasis a los derechos de la Madre Tierra y en la armonía con la naturaleza? Pareciera más bien que existe un sistema en que se ha dado piedra libre a que se quemé nomás. ¿Cómo entiende esto un investigador?

S.C. Yo lo entiendo como señales de políticas públicas. En el caso de los desmontes, cada año se desmonta en unos 50.000 predios, y entre el 50% y el 80% son ilegales. Tener un permiso no significa necesariamente que se haya hecho de forma legal, porque se puede tener un permiso para un área específica del predio y estar desmontando otra área. Sin embargo, investigadores como yo y como otras personas logramos distinguir el área autorizada y dónde está el área que efectivamente se ha desmontado. Ahora podemos tener ese nivel de detalle, lo que permite afirmar que lo más probable es que cerca del 97% de los desmontes ilegales no se sancionen.

R.B. Es decir que tú afirmarías que es una política pública del MAS?

S.C. Así es, pero más que ver con el MAS, tiene que ver con el mito de la propiedad privada. En 2008-2009, después de que se estableció el límite máximo de 5.000 hectáreas de propiedad, se empezó a rumorear que iban a nacionalizar las tierras de los grandes terratenientes, y que incluso ya no iba a haber propiedad privada en el país. Fue en ese momento que le pusieron un alto a Almaraz, que era el viceministro de Tierras, y se decidió que ya no se hablaría de reversión de tierras.

Si no me equivoco, desde entonces nunca más hubo reversión de tierras. Incluso el caso de Marinković, aunque muy emblemático y anecdótico, no representa la política pública del país. Ahora, ¿qué ha pasado con este tema? No es que desde entonces no se haya incumplido la norma, ¿verdad? Tampoco es que no haya casos de tierras que deberían ser revertidas. Lo que sucede es que ya no se quiere aplicar esa política. Con esto en mente, en ese momento el desmonte y los incendios no eran un gran problema, y al mismo tiempo el Gobierno quería dar garantías para la inversión agropecuaria.

Los niveles de desmonte crecen de forma abrumadora, y a partir de 2019 aparecen los megaincendios. Son señales de políticas públicas: cada año se desmonta en unos 50.000 predios, y entre el 50% y el 80% son ilegales, y cerca del 97% de los desmontes ilegales no se sancionan. Por otra parte, el MAS –amparado en el mito del desarrollo, del progreso y de la industrialización que está detrás de esas políticas públicas– siempre ha creído que se tenía que explotar intensa y extensivamente toda el área de la Amazonía.

R.B. Ese es el otro tema: el MAS –amparado en el mito del desarrollo, del progreso y de la industrialización que está detrás de esas políticas públicas– siempre ha creído que se tenía que explotar intensa y extensivamente toda el área de la Amazonía. Recuerdo que alguna vez se planteó de manera clara que si se consideraba necesaria una industrialización y un desarrollo que implique arrasar parte de la Amazonía, había que hacerlo ¿no?

S.C. Totalmente. En 2013 Álvaro García Linera planteó –dos años antes de la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”, de 2015– una meta de

1.000.000 de hectáreas de crecimiento agropecuario por año durante una década, extensión que, por lo tanto, habría que desmontar. Hoy estamos en el máximo de nuestro desmonte histórico, cerca de 600.000 hectáreas ¿Te das cuenta? Ni siquiera hemos llegado al 1.000.000 de hectáreas por año que planteaba y estamos cerca de un desastre ecológico. Era un planteamiento absurdo.

Ahora, ¿qué implica esto? Significa que las multas por desmonte o incendios permanecen a niveles tan bajos que si ocurre un desmonte ilegal prácticamente no hay consecuencias. Además, entre 2013 y 2016 aumentó considerablemente la cantidad de permisos otorgados, llegando a duplicarse o triplicarse, bajo la lógica de reducir el desmonte ilegal. También crearon una norma que regulariza todos los desmontes ilegales previos a 2013, y ampliaron esta prórroga como cinco veces. Entonces hay un conjunto de normas diseñadas para tranquilizar a quienes desmontaron de forma ilegal, asegurándoles que no serán sancionados o que, si lo hacen, la multa será mínima. Finalmente se abre una tercera opción: la posibilidad de tarde o temprano regularizar el desmonte ilegal.

R.B. Se habla también del paquete de normas incendiarias. ¿Cuáles son esas normas, que ahora se quiere abrogar?

S.C. En este mismo momento en que tú y yo estamos hablando se está tratando en el Senado una norma que pretende abrogar todo el paquete incendiario, y que posteriormente tendría que será promulgada por el Presidente. Es la primera vez en los últimos seis años que tenemos esta chance histórica.

R.B. Ojalá que salgamos con buenas noticias.

S.C. El paquete incendiario consiste en unas siete u ocho normas, pero también depende de las interpretaciones: si se incluye o no a los transgénicos, si se incluye o no el biodiésel y muchos otros elementos.

R.B. Cuáles serían las tres más importantes?

S.C. Las tres más importantes son: i) la Ley 741, que permite a pueblos indígenas, interculturales y campesinos desmontar 20 hectáreas por persona sin tener que realizar trámites burocráticos; ii) la Ley 1171, que establece el régimen de tarifas con elementos más permisivos; y iii) la Ley 337, que trata sobre la regularización de desmontes ilegales y de la cual derivan

cuatro a cinco prórrogas. Estos son instrumentos que permiten desmontar de forma legal, y en el caso de la 1171, incluso facilitan actividades ilegales. Sin embargo, abrogarlas no soluciona todo el problema.

R.B. El otro problema es que se promulga leyes pero luego no se les da seguimiento, y generalmente nos olvidamos también de los procedimientos. Otro tema que quería abordar es el de los actores con los cuales se ha asociado y se asocia los incendios y, de alguna manera, los motores que están detrás de los grandes incendios y de la deforestación. En uno de tus trabajos, tú haces una recapitulación y señalias que el libro *Causas, actores y dinámicas de la deforestación en Bolivia 2010-2022*, de Müller, Montero y Mariaca, recientemente publicado por el CEDLA, sostiene que el sector ganadero contribuyó con el 50-57% a la deforestación entre el año 2010 y el año 2022, mientras que en el trabajo de Oxfam se responsabiliza no tanto al sector ganadero como a la expansión agrícola. Entonces háblanos de la deforestación, por un lado, de los incendios, por el otro, y su relación con los actores dedicados sobre todo a la agricultura de la soya, pero también con la ganadería.

S.C. Es necesario diferenciar entre los incendios y los desmontes. Yo soy, sobre todo, un especialista en desmontes; los incendios tienen más relación con el tráfico de tierras, el avasallamiento, las malas prácticas agrícolas y muchos otros factores. Cuando volví a Bolivia hace unos años después de trabajar en Alemania, se escuchaba una narrativa que responsabilizaba por los incendios a los interculturales. Sin embargo, los datos del Gobierno, del INRA y de la ABT sobre la afectación de incendios nos cuentan otra historia. Nos muestran un patrón muy similar al de los desmontes, donde los mayores responsables son los propietarios empresariales, grandes y medianos (que poseen hasta 5.000 ha), que incluyen a los colonos menonitas, y en último lugar, los interculturales.

Hay que diferenciar entre incendios y desmontes. Los primeros están más relacionados con el tráfico de tierras, el avasallamiento, las malas prácticas agrícolas y muchos otros factores. Los mayores responsables son los propietarios empresariales, grandes y medianos (que poseen hasta 5.000 ha), que incluyen a los colonos menonitas, y en último lugar, los interculturales.

R.B. Entonces, primero los grandes empresarios, luego los menonitas y luego los interculturales, esa sería la jerarquía.

S.C. Y, por último, los pueblos indígenas y los pequeños productores. Pero hay que tener en cuenta que los incendios ocurren también en tierras fiscales; sin embargo, eso no sucede con los desmontes. Además, en los incendios no siempre hay una intención clara; también puede haber incendios que se salen de control y, por lo tanto, que se salen de los límites de la propiedad donde se iniciaron.

¿Qué nos dice la información sobre la producción de las mercancías que remplazan al bosque? Las investigaciones del CEDLA nos muestran que la ganadería es la actividad que más se expande y que explica tanto incendios como desmontes. Por otro lado, el informe de Oxfam pone mayor énfasis en la agricultura, y señala que en Bolivia, a diferencia de otros países, nos enfocamos en un solo gran monocultivo, la soya. Actualmente una de cada tres hectáreas cultivadas del país es de soya, y este cultivo es responsable de desmontes en una proporción mucho mayor que en otros países, por lo menos entre cuatro a cinco veces más, en términos relativos.

R.B. Tú decías una cosa muy interesante en tus trabajos: que resulta mucho más barato adquirir tierras, quemarlas y volverlas soyeras, que cuidar las tierras que se tiene, fertilizándolas. Entonces se tiende a una agricultura extensiva, es decir que se necesita cada vez más tierras, por lo que es necesario acapararlas. ¿Eso es así?

S.C. Totalmente, y es por eso que me interesaba tanto mirar la soya, porque es uno de estos cultivos pioneros que permite que el financiamiento fluya a través suyo, incluso para la ganadería. La soya juega un rol mucho mayor que su propio impacto en la tierra, puesto que en muchos casos es la que permite abrir el camino para invertir en ganadería después de desmontar.

R.B. ¿Cómo se distribuye la producción de soya entre las grandes empresas, los menonitas, los interculturales y los pequeños productores?

S.C. Generalmente las grandes empresas no se enfocan en el eslabón de la producción, sino en el eslabón de la transformación, y, a la vez, siguen siendo grandes propietarias de tierras. ¿Qué nos dice esto? Que el 4% de las unidades agropecuarias del país, sobre todo empresas ganaderas y soyeras, tienen cerca del 30% de la tierra del país. En términos de soya,

se estima que hay entre 17.000 y 20.000 productores de soya. Me atrevo a dar esta estimación porque no hay datos actualizados publicados; la única estimación que existe es la de ANAPO de hace una década. Sin embargo, los datos del sistema bancario muestran que más de 17.000 personas acceden a créditos para la soya.

Con eso en mente, se estima que ocho grandes empresas capturan más del 60% de todos los créditos bancarios para la soya. Esas ocho grandes empresas son, además, parte de conglomerados o grupos empresariales, que pueden acumular entre 50.000 y 100.000 hectáreas de tierra, a pesar de que la norma permite un máximo de 5.000 hectáreas. Si sumas esos datos, caes en cuenta de que se trata de sectores que tienen una alta concentración en términos de poder económico y de propiedad de la tierra. Lo que yo mencionaba sobre el sistema extensivo de desarrollo es que, según los propios análisis del sector soyero, ellos reconocen que en términos de costos es más barato producir en tierras recientemente deforestadas porque tienen más nutrientes.

R.B. Te has referido a ocho empresas.

S.C. Entre esas ocho empresas están Cargill y Alicorp, que son más bien procesadoras y comercializadoras. Hay otras que abarcan todos los eslabones y que también tienen tierra, como Gravetal y Sojima.

R.B. Los medianos empresarios y los pequeños propietarios también se dedican a la soya, ¿no es cierto?

S.C. Sí, pero no son necesariamente los que reciben los mayores beneficios porque los grandes transformadores de la soya ofrecen a los productores dinero por adelantado para que puedan producir e invertir, y a veces estos contratos pueden terminar por incumplimiento y los pequeños productores pueden acabar vendiendo su propiedad porque deben pagar deudas. Entonces, para simplificarlo, si se ingresa al rubro de la soya como pequeño productor, es muy probable que se salga muy rápidamente; si se trata de un productor mediano, hay una pequeña posibilidad de que logre convertirse en uno grande.

R.B. Es decir que hay una tremenda concentración de la tierra y de los préstamos crediticios...

S.C. En Bolivia hay un constante déficit en la producción de la soya porque tenemos una enorme capacidad de transformación, y las empresas transformadoras buscan comprar esa soya de manera agresiva. Sin embargo, como no hay suficiente interés en seguir produciendo soya, muchos productores terminan cambiando de cultivo o revendiendo sus tierras. Al final del día, tenemos los rendimientos de soya más bajos del continente y un sistema productivo que sigue expandiéndose sobre nuevas áreas. La información que he recibido de ejecutivos de las grandes empresas soyeras es que el negocio de la soya en Bolivia es, en realidad, el negocio de la tierra. Es más, alguno de ellos me ha comentado en privado, refiriéndose a los bolivianos en forma despectiva, que en Bolivia no están interesados en producir sino únicamente en aprovechar las ganancias, casi sin impuestos, logradas a través de la especulación y el acaparamiento de la tierra.

R.B. Y entonces, ¿cuál es el rol de los interculturales?, ¿dónde están y cómo ves el rol económico, social y político que tienen, que han tenido y que puedan tener?

S.C. Mira, históricamente los interculturales están en Santa Cruz desde larga data, sobre todo en el corazón del núcleo soyero, como Cuatro Cañadas y San Julián. También han recibido dotaciones de tierra más recientes en zonas de frontera agrícola: San Ignacio y Concepción. Por otro lado, también hay traficantes de tierras que operan bajo la fachada de ser interculturales, personas que crean comunidades en papel, con un mínimo de siete supuestos miembros. Los interculturales en general no están invirtiendo en el desmonte porque no poseen tanto dinero ni maquinaria, salvo algunas excepciones. En realidad, los interculturales se han convertido en la puerta de acceso a tierras forestales tanto para el agroempresariado como para los menonitas.

R.B. ¿Cómo funciona esa puerta?

S.C. Funcionan dos esquemas. La dotación de tierra y el avasallamiento, cuya propiedad se regula mediante usucapión años después. Esta última figura es más difícil de obtener, pero implica mayor corrupción e ilegalidad porque muchas veces se crean comunidades fantasmas. En el caso de la dotación, surge una pregunta social: ¿hasta qué punto es válido, en términos de justicia social, dotar con tierras a personas que vienen de muy lejos? A

nadie le desearía tener que meterse a pleno monte para construirse una nueva vida y sembrar un chaquito. Es un trabajo que, definitivamente, no es el sueño dorado de ningún altiplánico. En cuanto al tráfico de tierras, la situación es abrumadora. ¿Por qué? Porque hay estudios muy serios –que no son míos, cabe aclarar– pero que no han sido publicados por la sensibilidad de la información que contienen, que revelan que, de 700 comunidades interculturales registradas en la Chiquitanía en un periodo de siete años, 200 eran fantasmas. Y si el 20% de los miembros de estas comunidades están involucrados en el tráfico de tierras, estamos hablando de una organización dedicada a este ilícito.

R.B. Habría, por tanto, un grave problema de especulación con la tierra, que nos conduce a la banca, a las finanzas grises de las cuales hablas y a las que les has dedicado un trabajo.

S.C. Antes quiero decir algo: en estos días hay un proyecto de ley que pretende dar acceso a la tierra a empresas del régimen de pequeños productores. ¿Por qué? Porque ya están pensando en cerrar la dotación, en terminar el saneamiento de tierras, y cuando este proceso termine, ya no habrá más dotación. La empresa está pensando a futuro y busca aprovechar el acceso a la pequeña propiedad, que hasta ahora no se ha usado como colateral financiero. Eso es justamente lo que buscan con esta ley: que puedan acceder a aquella y usarla como garantía financiera.

R.B. Volvamos a tu trabajo sobre las finanzas grises. ¿A qué llamas finanzas grises? Y ¿cómo es posible tener acceso a las fuentes que has utilizado? Te hago esta pregunta porque si se me ocurre hacer un trabajo sobre los microcréditos, me resulta muy difícil acceder a la información al respecto, incluso para usarla en una investigación. ¿Cómo puedes acercarte al tema de las finanzas grises y saber cómo se están utilizando esas finanzas en relación a los incendios, a los desmontes, a las empresas y a la agroindustria?

S.C. Primero debo explicarte que cuando yo empecé ese trabajo mi intención fue tratar de encontrar los cuellos de botella, los puntos estratégicos que permitan frenar el desmonte en el país. Con esa lógica, empecé preguntándome: ¿cómo funciona este negocio? Desmontar es carísimo; necesitas una maquinaria que cuesta entre 70.000 y 150.000 dólares, y que

alquilarla con servicio completo (maquinaria, operador y gasolina) cuesta 70 dólares por hora. Entonces me surgió la pregunta: ¿de dónde viene esa plata?

R.B. ¿Y quiénes pueden hacerlo?

S.C. He visto estudios de unos colegas del CEDIB y de Fundación Tierra que han usado datos empresariales, y cuando los reviso, me doy cuenta de que en realidad tenemos acceso a las carpetas empresariales del país. Esto quiere decir que hay un sistema público, el SEPREC (antiguamente Fundempresa), donde tú te puedes comprar, de forma legal, la copia digital de toda la carpeta histórica de una empresa. Ahí encuentras actas de constitución, cambios de accionistas, contratos, préstamos, etcétera.

R.B. ¿Existe esta información para todas las empresas?

S.C. Para todas las empresas que son sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, que son las grandes empresas del país. Entonces comienzo a mirar que estas empresas soyeras, que dicen ser tan exitosas, tienen balances negativos o nulos, pese a que los precios de la soya están por las nubes. ¿Cuál es, por lo tanto, el negocio? Es decir que si yo fuese el dueño de esta empresa, que apenas genera utilidades, despido a mi gerente, ¿verdad? Pero me doy cuenta de que la parte de los activos, en particular de la tierra, crece de forma abrumadora, e incluso llega multiplicarse por 4 o 5 en una década, mientras que la empresa continúa con un mismo nivel de ingresos.

R.B. O sea que es un tema de tierra, de acaparamiento y de especulación.

S.C. Empiezo por analizar casos particulares de predios que están desmontando, y para lograr una comprensión más completa de lo que sucede, busco los datos del flujo financiero. No nos habíamos dado cuenta de que en el país ya se tiene acceso a datos de créditos bancarios, e incluso a datos de exportación por empresa; la cuestión es saber dónde buscarlos. Los datos de créditos bancarios nos permiten ver de qué banco provienen los préstamos, a qué sector se dirigen, cuántas personas o grandes empresas los reciben. Luego, con esa información de la ASFI puedes ver el panorama general; entonces caes en cuenta de que el 60% de los préstamos se destina a ocho grandes empresas. Como sé cuáles son las principales empresas soyeras, identifico a esas ocho, sumo, resto y así voy armando un rompecabezas entre la información financiera que proporcionan los datos oficiales y lo

que estos revelan de dichas empresas. Después analizo cuántos impuestos pagan, cuánto empleo crean, en qué condiciones obtienen los préstamos y quiénes son los accionistas. Es ahí donde te encuentras con actores políticos y sociales aparentemente antagonistas, pero que en los hechos habían sido socios económicos. Ahí es como logras explicar por qué las normas no están cambiando y por qué el sistema no está en contra: el antagonismo que uno podría pensar que existía entre el MAS y el agro cruceño no había sido tal.

R.B. Me acabas de decir que gran parte de las fuentes financieras son accesibles, lo que supone tener acceso a la información de las empresas; como afirmas, solo hay que saber dónde buscarlas.

En Bolivia hay acceso a datos sobre créditos bancarios, e incluso de exportación por empresa. Con estos datos encuentras que actores políticos y sociales aparentemente antagonistas, en los hechos son socios económicos. Entonces te explicas por qué las normas no están cambiando y por qué el sistema no está en contra: el antagonismo que uno podría pensar que existía entre el MAS y el agro cruceño no había sido tal.

S.C. Sobre todo para alguien que trabaja en el sistema financiero, esos datos son súper conocidos y los saben manejar. Pero la gente que trabaja el tema de la tierra conoce de su existencia y no los usa. Lo que sucede, por tanto, es que tenemos una visión bien compartimentada de los temas que investigamos, y no cruzamos información, no tenemos acercamientos y no nos capacitamos mutuamente.

R.B. Varias instituciones trabajan estos temas, como la Fundación Tierra, el CEDLA, Oxfam. ¿Hasta qué punto hay acuerdo entre estas instituciones, y cuáles son sus diferencias? Por otro lado, están también las propias instancias de las organizaciones cruceñas, que van a proporcionar sus propios datos y argumentaciones. Sobre qué se basan, cuán fiables son, cuáles son sus datos...

S.C. Organizaciones como las ONG que has mencionado se respetan entre sí, comparten información, no compiten entre sí. Ahora, en este ámbito es muy importante ser rigurosos porque en el momento en que uno

de nosotros pueda ser observado porque ha cometido un error grave, todos nos podemos ver involucrados, todos resultamos afectados.

R.B. Todos pueden caer al pozo, digamos.

S.C. Aunque en estos trabajos no hay revisión de pares, sí queda claro que la información y el análisis sobre la tenencia de la tierra, los incendios y la pérdida de bosques se trata de manera muy rigurosa en estudios académicos y en plataformas globales. Además, si los datos de una fuente difieren en un 5% de otros, no importa mucho, ya que en términos generales los datos dicen más o menos lo mismo. En cuanto a la información sobre tenencia de la tierra, esta proviene exclusivamente del INRA. Sobre la información de las empresas, no he visto un solo estudio sobre el agronegocio que contradiga lo que estamos diciendo. Al punto de que cuando la ANAPO, que es la representante del sector soyero, afirma que no ha deforestado una sola hectárea en los últimos años, tal aseveración provoca sonrisas incluso entre los mismos productores de soya.

R.B. Estaba viendo algunas declaraciones recientes de estos actores, que niegan la culpa que se les atribuye. He leído, por ejemplo, que ellos dicen que gran parte de los incendios está en tierras fiscales; dan porcentajes y cifras. Por tanto, de alguna manera existe una batalla en torno a los números y a los actores involucrados, ¿no?

S.C. Ellos tienen datos muy buenos; no los van a usar ni, menos todavía, admitir alguna responsabilidad. Claro, ellos saben eso y usan los datos de forma excepcional, pero solo cuando les conviene. Lo que queda claro, en mi caso, que trabajo en desmonte, es que el desmonte no es ambiguo: el desmonte es de responsabilidad de los propietarios del predio donde ocurre. En el caso de la soya, lo positivo es que existen mapas mundiales de las áreas de soya, elaborados por universidades estadounidenses, que cada año vienen al campo y que se juntan con la ANAPO y con productores de soya para parametrizar estos mapas. Por eso tenemos datos de soya tan precisos, mientras que los datos de ganadería son péssimos.

R.B. Resulta claro, por tanto, que no serían los interculturales los responsables...

S.C. La semana pasada salió una nueva encuesta de DELFI a nivel nacional que indica que el 70% de los bolivianos piensa que la primera causa

de los incendios y desmontes en el país es el agronegocio y la ganadería. Hemos estado batallando todos estos años para deconstruir ese otro mito, y está dando resultado.

R.B. Luís Arce también lo afirma... Antes de terminar, quisiera tener tu opinión sobre el extractivismo agrario, que me parece importante, además de vincularlo con el tradicional exactivismo. ¿Cuál es tu mirada, cuáles son tus criterios?

S.C. A mí me parece muy importante porque es el que nos permite entender el tema de la tierra detrás de los bosques y de las mercancías que lo impulsan. Muchos de los estudios actuales se enfocan en la producción, bajo la noción de que es la que está llevando al desastre actual. Pero, en los hechos concretos, este fenómeno tiene más que ver con el acaparamiento de tierras, con la tenencia de la tierra, con la especulación comercial y con mercantilizar el bosque, destrozarlo y volver la tierra una mercancía para producir y entrar en cadenas de valor globales, regionales, internacionales y nacionales. Esto conlleva una especulación comercial y financiera, que considero que es donde está la mayor parte del negocio de la tierra. Esto también explica por qué no se puede competir produciendo de forma más orgánica, cuando tenemos en frente a la gran producción empresarial soyera.

R.B. Entonces tú nos invitas a que vayamos más allá de los productos, más allá de la soya, más allá del producto específico, articulando además esferas de análisis y relación, viendo también cómo se concatenan y cómo están ligadas y vinculadas.

S.C. Totalmente. Creo que esa mirada más integral es la que nos va a permitir problematizar de forma correcta y capaz para encontrar soluciones o, por lo menos, para no estigmatizar a actores que no deberíamos y muchas otras cosas que son problemáticas.

R.B. Muchísimas gracias. Tu aporte es muy importante para *Umbrales* y para el país en general.

S.C. Muchísimas gracias a ti.